

FUMIGA O LO DESCERTIFICO



Insurrección

Revista Semanal del Comando Central del ELN
Edición N.657 del 29 de octubre de 2018

SUMARIO

Insurrección

[Editorial]

LA LEGALIDAD SE CONSTRUYE EN TORNO A LA PAZ

Autor: Comando Central

4

[Caricatura]

LA SELFIE 1176 DE CARRASQUILLA

Autor: NuChe

9

[Declaraciones]

MOVILIZADOS EN LA ESPERANZA

Autor: Líderes religiosos y organizaciones sociales del Pacífico y el Suroccidente

10

“UN ACUERDO DE PAZ QUE TRANSFORME LAS CAUSAS DEL CONFLICTO Y PONGA POR ENCIMA LA VIDA”

Autor: Campaña Paz Completa

14

[Comunicados]

TIEMPOS DE RESISTENCIA EN EL CATATUMBO

Autor: Frente de Guerra Nororiental

18

[Solución Política]

SI NOS MOVEMOS, CAMBIAMOS TODO

Autor: Victoria Celis

22

LOS ROSTROS DE LA MATANZA DE LÍDERES EN OCTUBRE

Autor: Himelda Ascanio

28

UNA POLÍTICA ANTIDROGAS NO PUNITIVA NI PROHIBICIONISTA

Autor: Natalie X Marley

36

[El Imperio]

LA EXPORTACIÓN DEL CONFLICTO POR LA FRONTERA SUR

Autor: Paula Ibañez

44

[Portada] Ilustración de Keko Olano, de la novela gráfica “Satanas”

[Sumario] Javier Jiménez, marcha en México el 10 de octubre de 2018.



LA LEGALIDAD SE CONSTRUYE EN TORNO A LA PAZ

En la semana anterior el país conoció los resultados de la última encuesta bimestral de Gallup Colombia, en la que el 64 por ciento de los encuestados, expresaron que la implementación de los acuerdos de paz con las FARC van camino del despeñadero. Y el 64 por ciento, está de acuerdo con que el Gobierno Nacional reanude los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.

El sentido común dicta enderezar el mal camino, en que el incumplimiento estatal ha postrado la implementación de los acuerdos firmados con las FARC; y también aconseja al Gobierno reanudar la Mesa de conversaciones de paz con el ELN.

Pero el Gobierno del Centro Democrático sigue haciendo todo lo contrario, que es aliarse con el Presidente Trump en el propósito de extraditar jefes de las FARC que firmaron la paz, tomando como excusa montajes judiciales. Conspiración contra la paz que apenas es un eslabón más de la cadena de incumplimientos a lo

acordado sobre verdad, justicia, tierras, reforma política, amnistía, proyectos productivos, planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, etc.

Frente al ELN, este Gobierno mantiene congelada la Mesa de diálogos, mientras arrecia grandes operativos militares en todos sus territorios; a lo que agrega una guerra mediática con “noticias falsas” en nuestra contra. A la vez que nos conmina a dejar de hacer acciones de respuesta a las operaciones ofensivas de sus Fuerzas Militares y paraestatales.

La política de los seguidores del ex presidente Uribe persigue truncar los esfuerzos de paz, hechos los últimos años; pretende reemplazarlos por guerra a los países vecinos y contra los campesinos cultivadores de coca; genocidio contra los líderes sociales y trato de guerra a la protesta social; para lo que destina aún más presupuesto para la guerra y reduce el destinado a educación y salud públicas.

El discurso del Presidente Duque quiere hacer creer a las colombianas y colombianos, que su propuesta de paz equivale a rehacer el país de acuerdo a las 50.000 leyes existentes. Este formalismo deja de lado la esencia del problema, porque la legalidad se construye en torno al diálogo por la paz, no alrededor de la guerra.

Nunca es tarde para rectificar el camino y dejar de ir hacia un despenadero, en el que colapsaría el acuerdo de paz, al consumar el acto de venganza que constituiría la extradición de líderes de las FARC hacia los Estados Unidos; desplome que impactaría terriblemente en el camino de solución política que transita el ELN.

La conformación de unas mayorías nacionales por la paz constituyen una severa advertencia para Uribe y sus seguidores, a quienes les cuesta tener voluntad para el cambio y la conciliación. En estos millones de colombianas y colombianos está la presión necesaria,



para hacer que la élite dominante deje a un lado los dictados de Trump y piense más en la nación colombiana.

La sociedad colombiana puede seguir contando con el ELN para lograr los objetivos pactados en la Agenda de conversaciones: *“Terminar el conflicto armado y acordar transformaciones para una Colombia en paz y equidad”*.



LA SELFIE 1176 DE CARRASQUILLA

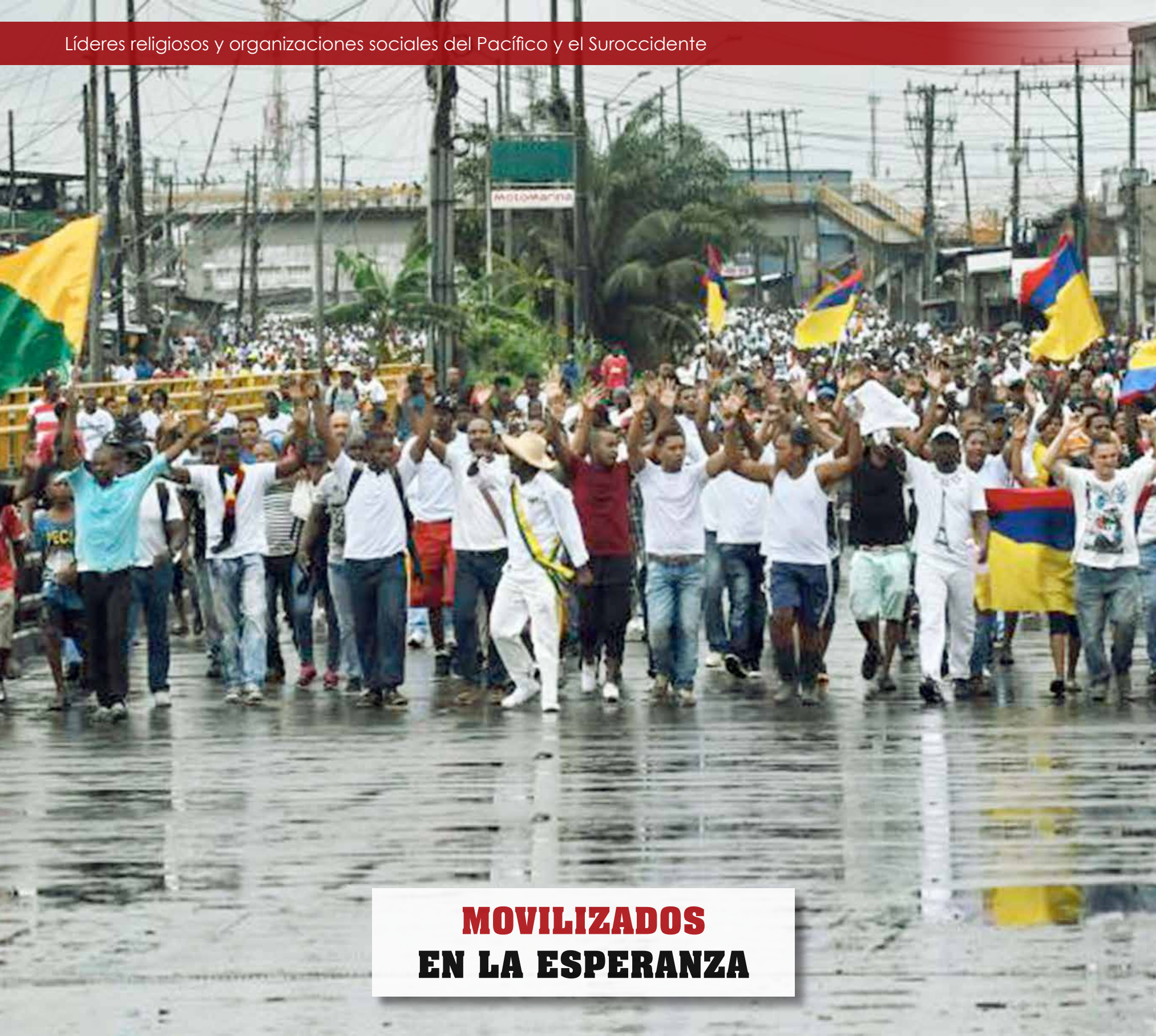
Al reanudarse la Mesa de conversaciones con el ELN, está por pactar un nuevo cese al fuego bilateral, como el cumplido durante 101 días al finalizar 2017; como un aporte desde ya a rebajar la intensidad del conflicto y llevar un alivio humanitario al país.

No hay que olvidar el mensaje del Papa Francisco, durante su visita a Colombia en 2017:

“La paz es un acuerdo para vivir juntos, un pacto social y cultural... Por la justicia y no la venganza; por la reparación en la verdad y no en el olvido”.

Ojalá el Papa le haya recordado esto, a la familia de Duque, en su visita al Vaticano de hace una semana.





MOVILIZADOS EN LA ESPERANZA

Durante los días 24 y 25 de octubre se adelantó el encuentro “Construcción de agenda regional eclesial de Paz del Pacífico y el suroccidente colombiano”, escenario de reflexión impulsado por la Iglesia Católica de la región, que iluminada por la Palabra de Dios e inspirada en el mensaje de paz y reconciliación del Papa Francisco, contó con la participación de obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, organizaciones sociales y étnico territoriales del Pacífico y Suroccidente colombiano. Expresamos lo siguiente:

1. Afirmamos que la paz es un derecho fundamental de las comunidades y de los territorios, y desde ese sentir hemos venido construyendo caminos e iniciativas de realización de la paz que corresponden con nuestras visiones y apuestas como pueblos con diversidad étnica, social, organizativa y cultural.
2. Desde los esfuerzos cotidianos y colectivos, observamos con preocupación las innumerables situaciones de vul-



neración y riesgo de afectación que tienen nuestras comunidades, tales como la victimización del liderazgo social, el fortalecimiento de la acción de actores armados, el incremento de economías ilegales, el vacío institucional en la respuesta a las demandas de las víctimas del conflicto armado, los daños al medio ambiente, el congela-

miento de los diálogos con el ELN, las debilidades en la implementación territorial del Acuerdo de Paz y las medidas legislativas que ponen en riesgo su contenido y espíritu, entre otras problemáticas.

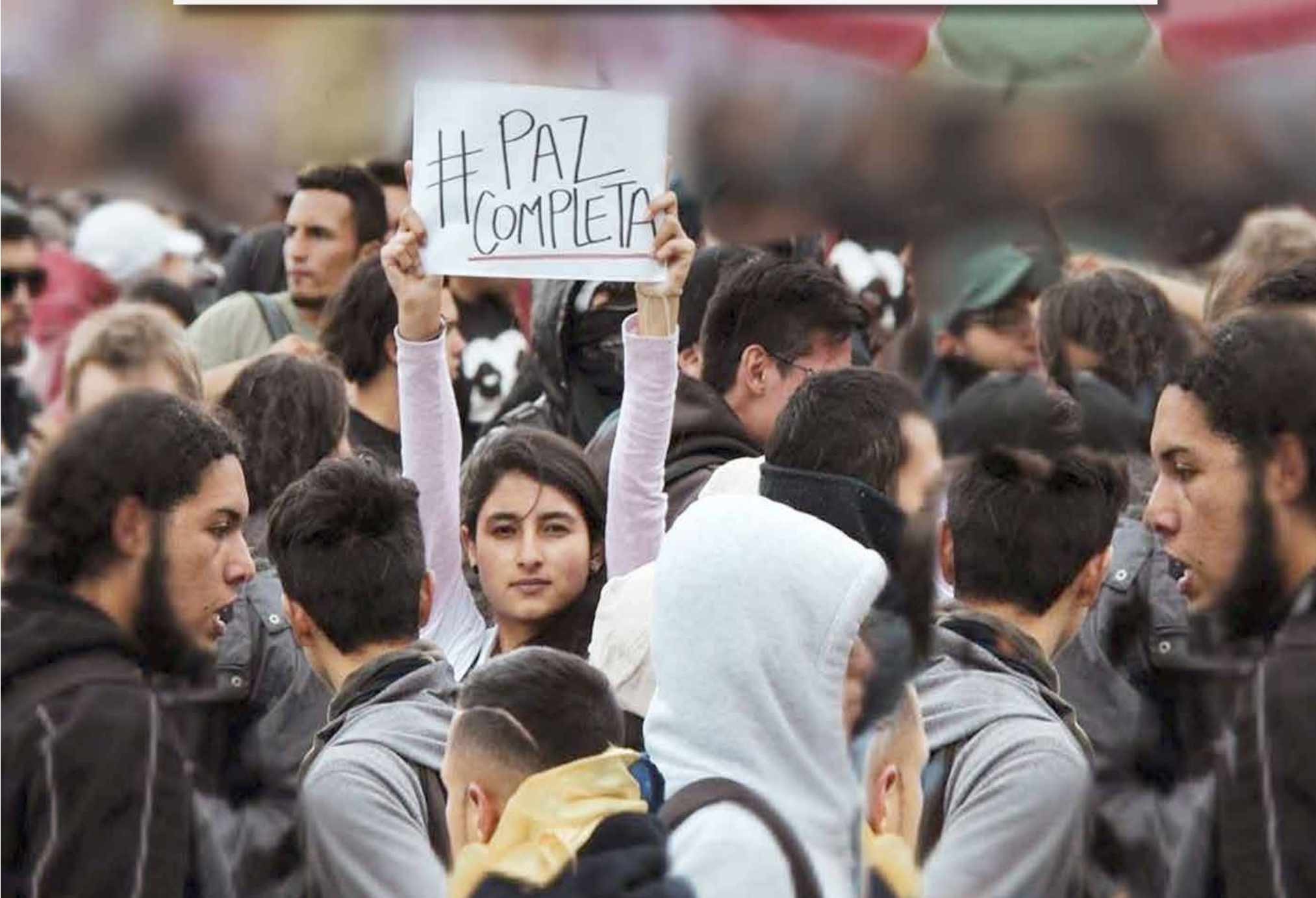
3. Ante estas difíciles realidades, abrazamos e invitamos a abrazar la paz con esperanza y responsabilidad. In-

vitamos al gobierno nacional y a los actores armados a encontrar fórmulas de diálogo y concertación, y en particular, al gobierno nacional y al ELN a reanudar la Mesa de Conversaciones y avanzar en la salida definitiva a este conflicto. Llamamos a la comunidad internacional a continuar rodeando los caminos de búsqueda de la paz integral en Colombia. De igual forma, nos convocamos desde las iglesias particulares, las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales a afianzar nuestra apuesta de hacedores de paz desde una noción regional.

4. La construcción de la agenda eclesial tendrá como cimientos el acompañamiento integral a las víctimas, el reconocimiento territorial al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la construcción de memoria, los diálogos territoriales para la paz con vida digna, la defensa del territorio, así como la salvaguarda a la salida política negociada; propósitos desde los cuales seguiremos nutriendo y aunando esfuerzos en la construcción de la paz desde el Pacífico y el suroccidente.

25 de octubre de 2018,
Cali (Valle del Cauca)

**“UN ACUERDO DE PAZ QUE
TRANSFORME LAS CAUSAS DEL CONFLICTO Y
PONGA POR ENCIMA LA VIDA”**



Alto Comisionado Para La Paz Responde solicitud de Campaña Paz Completa de continuar diálogos con Ejército de Liberación Nacional.

Ante la incertidumbre que atraviesa el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN y pasados más de dos meses de la posesión de Iván Duque como presidente, la campaña por una paz completa ha mantenido la insistencia de la salida negociada al conflicto armado, por tal motivo el pasado 28 de septiembre radicamos una carta en la presidencia de la República donde solicitábamos al nuevo presidente la continuidad del proceso y la inclusión de la sociedad civil en las consultas de evaluación para tomar una decisión que favoreciera la paz de Colombia.



Aunque no fuimos llamados a dialogar con el nuevo Gobierno y aún no hay una decisión de continuar con la mesa de La Habana recibimos una comunicación de la oficina del Alto Comisionado para La Paz donde se resalta la posición del presidente Iván Duque frente al proceso de paz con el ELN, valoramos el reconocimiento del presidente a la sociedad civil que ha rodeado el proceso y que exige el diálogo como manera de ponerle fin al dolor que ha dejado la guerra “la sociedad colombiana se ha manifestado, y quiere que se avance en la desmovilización el desarme y la reinserción de ese grupo armado organizado, y esa voluntad la tengo como presidente”.

Esperamos que como lo ha manifestado, su voluntad de paz se materialice reanudando las negociaciones y así lograr un acuerdo final que transforme las causas del conflicto armado y sobre todo que se ponga por encima la vida, mientras más corre el tiempo perderemos más colombianos y colombianas que anhelan un mejor país.

Pedimos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que hagan puentes entre la sociedad civil que ha rodeado este proceso y este Nuevo Gobierno que pú-

blicamente manifiesta su interés de mantener canales de comunicación con nuestras plataformas e iniciativas de paz, esperamos una interlocución directa para insistir en la paz completa.

Como campaña seguiremos rodeando este proceso, cuenten con nosotros y nosotras siempre para la paz.

#MesaGobiernoELNYa

23 de octubre de 2018



TIEMPOS DE RESISTENCIA EN EL CATATUMBO

Varios acontecimientos vienen sucediendo en el Catatumbo y la Provincia de Ocaña en los últimos meses que alteran la vida, la seguridad y la convivencia, hechos relacionados con narcotráfico, delincuencia común, violación a los derechos humanos, asesinatos y desplazamiento, y de los cuales la autoridades civiles y militares vienen sindicando al Ejército de Liberación Nacional, de ser el responsable de estos hechos, matriz que han venido posesionando para justificar una mayor intervención militar en la región.

Los planes para el Catatumbo anunciados por el presidente Iván Duque en su visita de agosto pasado, como era de esperarse, agudizan la situación de crisis social, económica y de seguridad.

Duque llegó a aplicar fórmulas de guerra para enfrentar los eternos conflictos de índole social, fórmulas que por el contrario recrudecen la situación de crisis en la que el Estado tiene

sometido por décadas a esta zona del país.

A los empresarios prometió créditos para extender el monocultivo de palma, para las corporaciones trasnacionales minero-energéticas destinó fondos para la adecuación de la infraestructura vial, que facilite el saqueo de recursos naturales; mientras tanto, para los campesinos e indígenas, sentenció erradicación forzada de cultivos de uso ilícito e incremento de la militarización.

Al tiempo que aumenta el pie de fuerza militar para el Nororiente, y particularmente con la entrada en operación para el Catatumbo de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA III), recrudece la ola de amenazas y asesinatos a dirigentes sociales, como también el incremento del número de secuestros de pobladores, hechos atribuidos al ELN, pero en los cuales aclaramos, una vez más, que No tenemos responsabilidad alguna.

Sigue siendo política del Estado la persecución y represión

al movimiento social como forma de frenar las resistencias, sigue siendo plan de los militares, generar descomposición para crear caos en las regiones donde operan.

Los llamados “héroes de la patria” llegan ahora con campañas cívico-militares a pretender con payasos, peluqueadas y lentejas, borrar las huellas de dolor y sangre, que sus balas, a través del terrorismo de Estado, siguen sembrando en el Nororiente colombiano.

Por otra parte, en recientes días afirmaron las autoridades del gobierno nacional, que el ELN estaba involucrado en el hostigamiento al puesto de Policía del municipio de Hacarí (Norte de Santander), sucedido el pasado 23 de octubre; que dejó un saldo de un policía y cuatro civiles heridos. Desmentimos estos señalamientos y aclaramos al pueblo Hacaritense que No estamos comprometidos en tales acciones.

En recientes semanas, decenas de familias campesinas habitantes de algunas veredas de

la zona norte del Municipio de San Calixto y otras del municipio de Hacarí han sido manipuladas por los Paramegas para obligarlas a marchar y abandonar sus parcelas. A los pobladores les han mentido, asegurando que el ELN tiene plan de dar muerte a los civiles residentes en estas comunidades, lo que ha provocado desplazamiento. Reiteramos que No es política del ELN actuar en contra de la población civil, ni en contra de las comunidades, sus dirigentes y sus organizaciones sociales.

Desde el inicio de la confrontación con los Paramegas el pasado 14 de marzo, señalamos que el objetivo de nuestro accionar es contra las fuerzas operativas de la alianza Paramilitares-EPL y sus apoyos militares de milicias, todos ellos vinculados abiertamente con el narcotráfico.

Los tiempos siguen siendo de resistencia para enfrentar los planes de intervención del gobierno Duque a favor de las trasnacionales y de todos aquellos factores que afectan



la vida, la convivencia y el territorio del Catatumbo.

Son tiempos para avanzar en la unidad del movimiento social y político que encare la violación a los Derechos Humanos que se agrava con la militarización; son tiempos para fortalecer la organización social, la lucha y la movilización por la defensa del territorio y el bienestar de las comunidades, contrario a la política de miseria y represión del presidente Duque; son

tiempos para levantar más alto las banderas de la Rebelión ante un gobierno y una oligarquía que le cierra los caminos a la Paz.

Frente de guerra Nororiental
Comandante en Jefe Manuel
Pérez Martínez

Ejército de Liberación Nacional
Montañas del Nororiente colombiano

Octubre del 2018.

SI NOS MOVEMOS, CAMBIAMOS TODO



El movimiento de los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria por la financiación de la Universidad pública y contra la privatización de la educación, arrancó con fuerza y sigue siendo fuerte. Las movilizaciones realizadas hasta ahora han sido multitudinarias, hay confluencia entre las distintas corrientes y organizaciones estudiantiles, apoyo de profesores, varios rectores, además de una gran respaldo y participación de las bases estudiantiles.

Para sostener la vitalidad demostrada hasta ahora, para forzar al Gobierno, y alcanzar logros, se requiere con prontitud de la participación y el respaldo del resto del movimiento social.

Prefieren dilatar a dialogar

Sólo hasta el pasado 25 de octubre, a casi tres semanas de iniciarse el paro y las movilizaciones, el Gobierno accedió a un primer diálogo con los estudiantes, al que no asistió la ministra de Educación, en su reemplazo envió al viceministro. Los estudiantes piden que se conforme una mesa multiestamentaria de diálogo, pero el Gobierno la niega, por su poca disposición al diálogo y la falta de compromiso con la problemática social.

El Gobierno está jugando a la división y al desgaste del movimiento estudiantil. Muestra de ello, son las promesas y las supuestas soluciones, mientras se niega a conformar una mesa de diálogo. El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones ofertas inciertas de 2 billones de pesos de las regalías para los próximos años, las transferencias de la Nación del IPC más tres



puntos el año que viene. Sumas que están lejos de los 4,5 billones que reclama el movimiento estudiantil. En casos como el de las regalías, son inciertas, ya que dependen de los Gobiernos Departamentales y no de la Presidencia.

El Gobierno pretende dejar que pase el tiempo, que el cansancio empiece a hacer mella o que surjan las divisiones en el movimiento. Por eso se niega al diálogo, al tiempo que genera falsas soluciones.

A esto se suma el bajo perfil que le han dado últimamente los grandes medios de comunicación, a los pronunciamientos estudiantiles, sus actividades, y la verdadera magnitud que han tenido las 3 grandes movilizaciones nacionales que se han realizado, incluyendo el paro de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).



**SI NOS
MOVEMOS
CAMBIAMOS
TODO**

Menos dinero a la guerra, y más para la educación

El temor a una movilización más amplia y a un movimiento mayor, que se reforzaría con el ingreso de los maestros, obligó al Gobierno a acceder a una petición muy sentida de FE-CODE, como era el retiro en el Congreso del proyecto de Ley 057, que según este sindicato “afectaba seriamente la financiación de la educación pública y perjudicaba la carrera docente”.

Los 4,5 billones de pesos de adición inmediata que están reclamando estudiantes, profesores y rectores, se pueden deducir del rubro destinado al pago de la deuda externa que es de 52 billones, y de los 33,4 billones que se le entregará a la guerra. Si se sacase todo del pago de la deuda, se le restaría a esta un equivalente al 8 por ciento. Si se le sacase sólo al rubro de la guerra, sería el 13,6 por ciento.

El camino es de lucha

Hoy se libra una batalla por la ampliación presupuestal para la Universidad pública y la calidad de la misma. La fuerza que ha logrado la movilización estudiantil, genera la posibilidad de arrancarle algo al Gobierno y acumular para nuevos pulsos. Pero ello, requiere de un compromiso mayor e inmediato de FECODE, de la Cumbre Agraria, de la CUT, de los indígenas, y del resto del movimiento social y de las corrientes que no están con el establecimiento.

Si el Gobierno logra doblegar ahora al movimiento que se ha levantado en torno la defensa de las Universidades Públicas, será una pérdida para todos los colombianos. En este sentido, toma fuerza e importancia el mayor respaldo posible al movimiento estudiantil y a la marcha convocada para el próximo miércoles 31 de octubre. Serán nuevas demostraciones de fuerza que deben obligar al gobierno a ceder, a facilitar el diálogo y a darle salida a las crisis de la Educación Pública.

LOS ROSTROS DE LA MATANZA DE LÍDERES EN OCTUBRE



Los Estados Unidos en su Doctrina de Seguridad Nacional clasifican como “enemigo interno”, a toda voz disidente y a toda protesta social. Por esto la persecución de los líderes de comunidades organizadas, que se oponen a la megaminería, al agronegocio y en general confrontan el saqueo de las riquezas nacionales y Bienes Comunes.

El régimen colombiano copió esta doctrina desde 1948, cuando la impusieron a la mayoría de países del mundo. Son 70 años de Genocidio de opositores legales, izquierdistas y líderes sociales; unas veces a cuenta gotas y otras, como ahora, en forma masiva; asesinatos que ya superan a los perpetrados hace 3 décadas contra los movimientos opositores Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar.

Las víctimas del Genocidio superan a las que produce el propio enfrentamiento armado entre la insurgencia revolucionaria y el Estado. Los brazos de esta matanza son los de siempre: agentes del

Estado que actúan de manera encubierta, quienes usan el camuflaje de “Águilas Negras”, y bandas criminales a quienes el Estado encarga tareas de sicariato.

Quienes eran los líderes asesinados

Jaime Rivera de 52 años, en la vereda Las Minas, corregimiento El Rodeo de Bolívar, en el Cauca, lo amarraron, lo torturaron y luego lo asesinaron junto a sus hijos Jaime Reinel de 20 años y Jeison Mauricio 23, participaron en acciones de resistencia contra la erradicación forzada, defensores del proceso de paz e impulsores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Los hechos ocurrieron el 6 de octubre [1].

Jhorman Arlex Ipia López, de 28 años, municipio de Corinto (Norte del Cauca), miembro activo de la Asociación de Trabajadores Campesinos y la Zona de Reservas Campesinas de Corinto, era el nieto de la representante

del Comité de mujer de la Asociación Campesina. Los hechos ocurrieron el día 7 de octubre.

Óscar Aníbal España, de 30 años, de Cartagena del Chairá, Caquetá, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Recreo. Se encontraba en su finca ordeñando, cuando desconocidos le dispararon, el 9 de octubre.

Dioselí Noriega, de 58 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Laguna, Convención, Norte de Santander, lo asesinaron cuando regresaba a la finca en horas de la noche, el día 13 octubre.

Celmira Chilgueso Hilamo de 34 años, comunera indígena Nasa. Violada y asesinada, en la vereda Pílam del Resguardo de López Adentro. La víctima deja tres huérfanos de 5, 8 y 13 años de edad. El 15 de octubre.

Carlos Trujillo Paz, dirigente comunitario de la vereda El Jigual, municipio de Rosas, Cauca. Hermano del Concejal William Trujillo. Los sicarios lo mataron en la

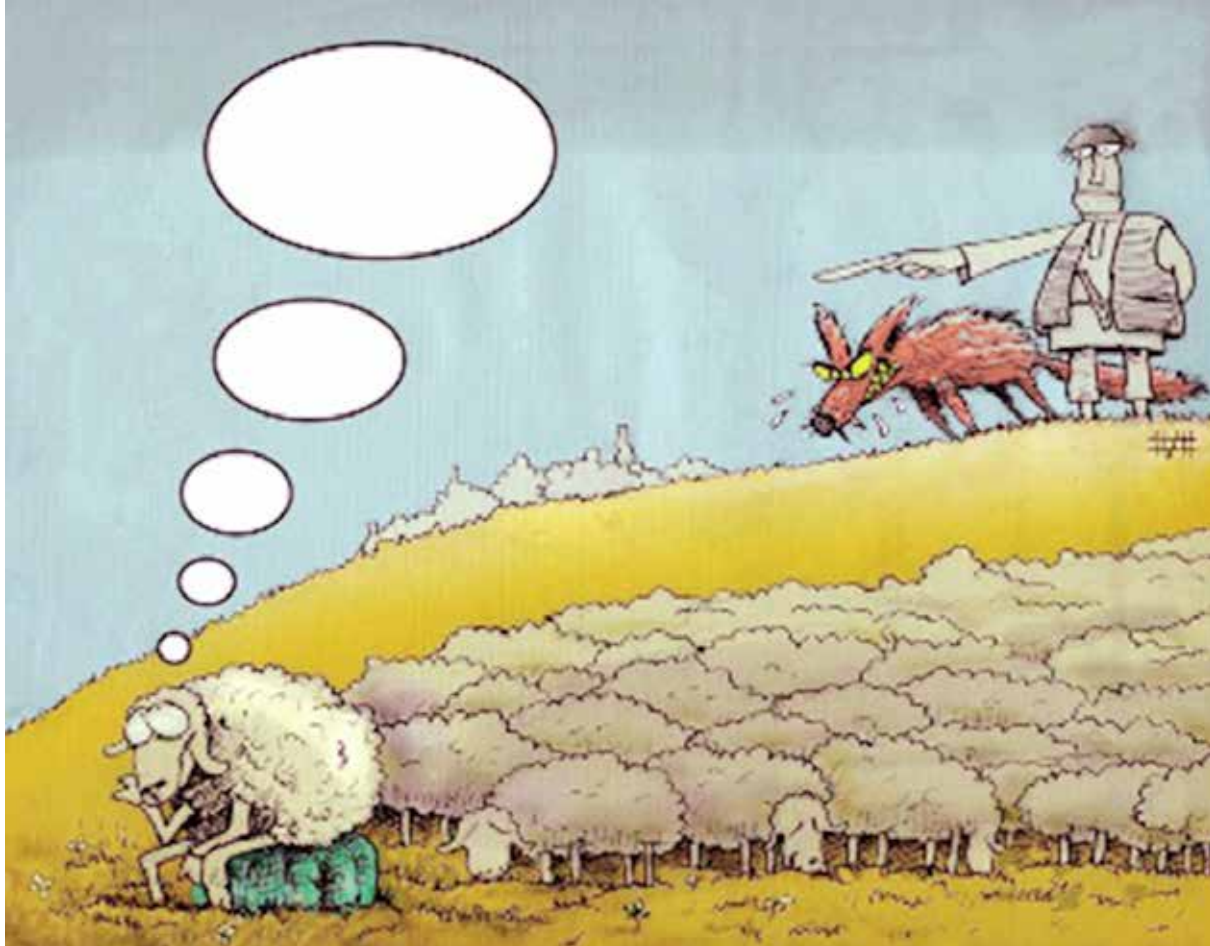


vereda Lomabajo, en la vía hacia la vereda Peña Blanca el día 22 de octubre.

Jose Domingo Úlcue, de Munchique Los Tigres en la Vereda Esperanza, vivía y enseñaba, en la institución educativa Benjamín Dindicué, sede Sek Dxij dictaba las materias de ética y agropecuaria, inculcaba el idioma propio Nasa Yuwe. Fue

asesinado en Santander de Quilichao, en horas de la noche del 22 de octubre [2].

María Caicedo, el 20 de octubre, en la madrugada en su casa en la vereda Desiderio, Argelia, hombres armados, intimidaron a la líder y a sus dos hijas a quienes dejaron amarradas, luego se llevaron a su madre, seis días después su cuerpo fue en-



contrado en el río Micay. La líder pertenecía Comité de Mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia (Amar); de la asociación campesina de trabajadores de Argelia (Ascamita), filial a La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro – CUT); a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); pertenecía al Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano

(Pupsoc); y de la coordinación social y política Marcha Patriótica [3].

Buscan aterrorizar para sofocar voces disidentes

Incontables denuncias han realizado líderes y organizaciones de amenazas recibidas, como estrategia de persecución para evitar la continuidad de los procesos sociales. En diferentes partes del país, con distintas moda-

lidades, pero el autor siempre es el mismo las “Águilas Negras”, fachada con que las Fuerzas Militares aterrorizan a los opositores del régimen. Veamos algunos casos.

La denuncia realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa reporta la amenaza a 89 periodistas en lo que va de este año.

El 10 de octubre, amenazan a Nación Wayuu, Wayuu Araurayu y Fuerza de Mujeres Wayuu la lucha de estas organizaciones es impedir que la multinacional del carbón el Cerrejón se siga expandiendo; porque esto representa más comunidades desplazadas y menos agua para ellas; hasta hora la empresa ha desviado 15 ríos, y pretende desviar el Ranchería, para lo que pidió licencia ambiental para construir cuatro pozos [4].

El 12 de octubre, líderes indígenas de Caloto y Corinto, fueron amenazados: “Los mal llamados líderes sociales vienen promoviendo la invasión a la propiedad privada con el discurso de liberación de la madre tierra,

afectando a empresarios de la región”, dice el comunicado. Para los Nasa el proceso que ellos lideran es “recuperar los territorios que fueron arrebatados por los grandes terratenientes a través de engaños y desplazamientos”, establecer su proyecto de vida, la protección de semillas y bosques, la defensa del agua y la producción de alimentos para sus comunidades.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia la agresión paraestatal contra el líder indígena Saúl David Carrillo de la Organización ASIGUAZU y delegado por la Macro Norte a la Mesa Permanente de Concertación –MPC Organización ASIGUAZU; dos personas encapuchadas y armadas pretendieron ingresar a su domicilio el pasado 21 de octubre de 2018.

El 15 de octubre, amenazan a integrantes de la Colombia Humana, el movimiento político de oposición que obtuvo más de 8 millones de votos y el segundo en aceptación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio pasado.

El 25 de octubre, amenazaron a líderes de ASCAMTAC en el Catatumbo, líderes campesinos que buscan la sustitución voluntaria e integral de los cultivos de uso ilícito, se oponen a la explotación inclemente de los recursos naturales; han denunciado el abandono estatal, el poco apoyo al campesinado y la militarización de la zona [5].

El 26 de octubre, fueron amenazados ambientalistas del Movimiento Ríos Vivos, quienes han denunciado el desastre ecológico, financiero y social que ocasiona la represa de Hidroituango. Esta amenaza se da en contexto de la estigmatización hecha por parte de varios alcaldes y de la Gobernación de Antioquia [6].

Trato de guerra a la protesta social

Otra modalidad de criminalización son los Falsos Positivos Judiciales, con que el régimen ejecuta detenciones arbitrarias, como el caso de Miriam Aguilar en Yopal, Presidenta del Comité municipal de la Asociación de

mujeres Unidas por Casanare, que apoya movimientos pro vivienda digna, e igualmente ha entablado acciones legales en defensa de los derechos de las clases populares. Fue sacada de su casa el día Primero de octubre por Miembros del Gaula de la Policía, sin material probatorio.

El 25 de octubre, más de quinientos efectivos de la policía militarizada llamada ESMAD y los escuadrones privados de los ingenios azucareros, llegaron hasta los puntos de liberación de la Madre Tierra en Corinto, norte del Cauca. Con tractores, tanquetas y maquinaria destruyeron los cultivos, incendiaron los ranchos y lanzaron gases indiscriminadamente a los comuneros indígenas [7].

Preguntas Simples

Si muchas de las víctimas estaban comprometidas con la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, ¿esto es una prueba más, sobre cómo el régimen sigue haciendo trizas los acuerdos de paz?



En la Agenda de conversaciones con el ELN aparece como un objetivo “sacar la violencia de la política”, entonces, si matan a quienes hacen oposición y protesta legal al régimen, y la matanza la incrementan día a día, esto significa que, ¿las clases dominantes Nunca van a sacar la violencia de la política?

[1] <https://twitter.com/COCCAMColombia/status/1048677702050435073>

[2] https://twitter.com/ONIC_Colombia/status/1054564745158840326

[3] <https://twitter.com/COCCAMColombia/status/1048677702050435073>

[4] <http://notiwayuu.blogspot.com/2018/10/fuerza-de-mujeres-wayuu-denuncia.html>

[5] <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article23612>

[6] <https://riosvivosantioquia.org/movimiento-rios-vivos-antioquia-recibe-amenaza-colectiva-e-individual-hacia-sus-lideres-fundadores/>

[7] <https://nasaacin.org/entre-mas-nos-atropellen-mas-nos-arraigamos-a-la-madre-tierra/>

UNA POLÍTICA ANTIDROGAS NO PUNITIVA NI PROHIBICIONISTA



El mundo tiene el prohibicionismo como paradigma de control de drogas desde hace más de un siglo, que consiste “en una respuesta punitiva de la aplicación de la ley”. Hay que desactivar la creencia que la respuesta a los problemas de violencia e inseguridad, es el encarcelamiento de más gente y el aumento de las penas, dice Coletta Younger de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y consultora para el Consorcio Internacional sobre Políticas de Droga [1]

“Es muy importante revisar la evidencia científica que existe, porque ya tenemos muchas décadas de esta guerra contra las drogas y es obvio que no ha tenido el resultado esperado... Hay evidencia más que suficiente para demostrar que durante la última década América Latina ha seguido este camino y está en una situación peor tanto en términos de la producción y consumo de drogas, como en todas las implicaciones que eso tiene en términos de violencia y corrupción... Por mucho tiempo no hubo ninguna discusión sobre este tema, pero ahora hemos visto cambios con la despenalización y regulación del cannabis, como hizo

esta semana Canadá, y como ya se aplica en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos”.

“En América Latina entre el 20 y 25 por ciento de hombres están encarcelados por delitos de drogas, y en las mujeres, ese porcentaje se sitúa entre el 40 y 80 por ciento”... el 85 por ciento de las encarceladas son madres, la mayoría de ellas solteras. “Para una madre soltera en situación de pobreza entrar en el negocio de las drogas es una buena manera de combinar sus necesidades de ganar dinero y sus responsabilidades con los niños”.

En América latina predomina la aplicación de leyes duras y desproporcionadas que “contribuyen a la sobrepoblación y al hacinamiento en las prisiones, al ser encarceladas durante tiempos muy largos un gran número de personas que cometieron delitos de drogas menores”.

Guerra por el territorio

Desde la década de los 90 Colombia ha sido el principal productor y exportador de cocaína

en el mundo, sin embargo, desde los años 70 con la declaración de Richard Nixon a la guerra contra las drogas para atacar fuertemente el narcotráfico en los países productores. Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas de sus dirigentes políticos, jueces, líderes sociales, periodistas y civiles, ni ha recibido un daño más grave a sus instituciones que Colombia.

El Plan Colombia iniciado por los Estados Unidos desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), para eliminar cultivos ilícitos, por medio de una fuerte estrategia militar y de fumigaciones aéreas con Glifosato. Los niveles generales de violencia en el país las recrudecieron con la ejecución del Plan Colombia, en el 2002, hubo 673.919 víctimas de guerra del sector más pobre de la población, una de las cifras más altas registradas en la historia colombiana. Así mismo, en México para el 2010, dos años después con la Iniciativa Mérida [2] se alcanzaron también cifras récord de muertes violentas en ese país.

La fumigación aérea con Glifosato a las plantaciones de coca fue



un ejemplo de la brutalidad sufrida por los pobladores rurales de Colombia, como una forma de guerra química; los campesinos y sus cultivos –tanto de uso ilícito como legales– fueron envenenados con tóxicos desde el aire. Una de las causas de desplazamiento, fueron precisamente estas fumigaciones, sin embargo, como no eran considerados, no fueron registrados, pero los resultados de estos exterminios agrícolas coinciden perfectamente con los propósitos de la guerra contra-

insurgente y el interés de despojar a los pequeños agricultores de sus tierras, pues cuál otra puede ser la razón de la “guerra contra las drogas” que como su nombre lo indica, sería simplemente esa, la guerra y todo el dinero que mueve.

Una nueva motivación, poco explorada, pero muy bien sustentada en el libro: “Capitalismo antidrogas una guerra contra el pueblo” [3], de la mal llamada lucha contra las drogas, es la expansión capitalista hacia los terri-



torios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles. El libro nos invita a repensar la guerra antidrogas más allá de la prohibición y la política de estupefacientes por sí misma, señalando entonces al terror y el pánico resultante de la guerra contra la población de las ciudades y el campo, como estrategia para implementar políticas que facilitarían la inversión extranjera y la entrada de multinacionales, especialmente de la megaminería y la extracción de petróleo, a zonas antes impenetrables, esto con el apoyo y finan-

ciamiento no solo de las Fuerzas Militares sino, además, de grupos paramilitares.

Existe consumo para evadir la realidad

La investigación del doctor Carl Hart sobre el abuso de drogas, enfatiza que la drogadicción, de hecho, no es la que devasta las comunidades, como frecuentemente se nos ha hecho creer. Uno de los hallazgos más relevantes, que sustentan esta hipótesis, supo-

ne que entre el 80 al 90 por ciento de las personas que de hecho consumen drogas como el crack, heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana no son adictos y que el ofrecimiento de alternativas de empleo a las personas permitirían disminuir el abuso de estas sustancias.

En 2014, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo que legalizó la producción, venta y consumo de marihuana, en un abierto desafío a las convenciones internacionales de control de narcóticos de las Naciones Unidas. Demostrando, nuevamente, que la adicción es un tema de salud, y que la criminalización de los consumidores y adictos a las drogas exagera los daños personales y sociales.

Otra de las estrategias planteadas por varios investigadores en la materia, articuladas al manejo de la adicción y políticas de prevención del consumo, la constituye el control por parte del Estado de la producción, venta y comercialización de las drogas ilícitas, en este sentido, Canadá da un paso histórico al aprobar con 52 votos a favor, 29 en contra y dos absten-

ciones el uso de marihuana con fines recreativos, ley que entró a regir desde el 17 de octubre de este año. Entre los argumentos a favor de esta medida, citaba precisamente la disminución del crimen organizado, la protección de los menores y el inicio temprano de consumo de estupefacientes.

Cultivos alternativos y reforma agraria

El problema de narcotráfico afecta fuertemente todas las esferas de la sociedad, y una medida que se basara exclusivamente en el control del consumo no asumiría el hueco económico derivado de los amplios incentivos que deja el mercado de las drogas ilícitas. Junto con las medidas de salud pública articuladas al control del mercado por parte del Estado, se debe plantear una reforma agraria.

El acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC abrió la posibilidad de una reforma agraria integral, una oportunidad que se traduciría en dos aspectos fundamentales: La posibilidad de que el aparato estatal llegara a poblaciones

históricamente abandonadas, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), con metas muy ambiciosas en un corto plazo, que a la fecha no se han cumplido, por ejemplo, reducir 100.000 hectáreas en un año; y por otro lado un presupuesto que aún no ha sido muy bien definido, aún menos ejecutado. El resultado al final sigue siendo el mismo, no existen carreteras, no se ha concretado dicha reforma rural integral y la coca sigue siendo el cultivo que mantiene las poblaciones.

El costo menor

No es posible hablar de soluciones definitivas, mucho menos perfectas, sin embargo, existe información suficiente que sustenta aquellas medidas que acarrearán un costo menor tanto económico, como social y principalmente de vidas humanas derivado de la violencia del narcotráfico, vemos así, como la mayoría de países tienden a implementarlas en sus políticas antidrogas, sin embargo, y a pesar de que Colombia es una de los países más golpeados por

la violencia y los daños derivados del mercado de drogas ilícitas, las medidas del gobierno se ajustan a aquellas que mayor costo han demostrado.

Todo esto se traduce entonces, en que no hay voluntad política real, pues las actuales medidas van en total contra vía de lo que la historia nos ha señalado como el camino más cierto para disminuir el consumo y la producción de drogas ilícitas. Pareciera, así que en el actual gobierno seguiremos en la vorágine de la “guerra contra las drogas” que solo trae violencia y miseria a los países más golpeados por el neoliberalismo, coincidentemente, también por el narcotráfico.

[1] Tasa de encarcelamiento por drogas aumenta más entre las mujeres. Sputnik, 19-10-2018.

[2] Iniciativa Merida: “guerra contra el narcotráfico” EEUU – México

[3] Dawn Marie Paley, *Capitalismo antidrogas una guerra contra el pueblo*. Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad Bajo Palabra, México, 2018. [<https://libertadbajopalabra.files.wordpress.com/2018/06/dawn-capitalismo-antidrogas-una-guerra-contra-el-pueblo.pdf>]



[4] Alejandro Gaviria Uribe, Daniel Mejía Londoño. *Políticas Antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos*. Universidad de los Andes [http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/GaviriaAlejandro_y_MejiaDaniel_Políticas_antidroga_en_Colombia_exitos_%20fracasos_y_extravios_Centro_estudios_tema_normatividad_consumo_de_droga_U.pdf]

[5] Daniel Rosen, Jonathan; Zepeda Martínez, Roberto. *La guerra contra el narcotráfico en México una guerra perdida*. Reflexiones, Vol 94, núm. 1, 2015. Universidad de Costa Rica. San José de Costa Rica. [<http://www.redalyc.org/pdf/729/72941346011.pdf>]

[6] ¿Por qué Colombia sigue perdiendo la pelea contra la coca? *Semana Rural*, Octubre, 2018 [<https://semanarural.com/web/articulo/coca-en-colombia-crecimiento-de-hectareas/653>]

[7] Los 5 documentales clave para entender en qué va la guerra contra las drogas. *El Pacifista* [<http://pacifista.co/los-5-documentales-clave-para-entender-en-que-va-la-guerra-contra-las-drogas/>]

[8] Canadá se convierte en el primer país del G20 en legalizar la marihuana con fines recreativos. *El País*, 20 de junio de 2018. [https://elpais.com/internacional/2018/06/20/america/1529454874_873290.html]



LA EXPORTACIÓN DEL CONFLICTO POR LA FRONTERA SUR

Pasa y mucho, tanto pasa que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, hemos normalizado la guerra y la violencia en el cotidiano de nuestras vidas.

Esa es la cultura que las élites dominantes y en especial las más ligadas a las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo, han propiciado en Colombia. Es el resultado de nuestra realidad y del trabajo cultural de los grandes medios de comunicación. La promoción de la cultura de la violencia a través de la televisión especialmente. Por eso, en Colombia se dan situaciones inentendibles en el exterior como el triunfo del No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz la Habana.

Todos los tráficos

Estas realidades son las que dificultan despejar la cortina de humo que se cierra y se difunde frente a situaciones como las que se presentan en el extremo sur occidental del país, en la frontera con el Ecuador.

Allí, de lado y lado, se ha incrementado exponencialmente la militarización en la zona. El tratamiento militar ha sido la única medicina para actuar sobre los “males delincuenciales” de estas regiones. En esta frontera ha estado acompañado por la presencia creciente de la DEA y la incidencia a veces no tan sutil de los distintos servicios de inteligencia norteamericana, so pretexto del control de la droga y de los cultivos de uso ilícito.

Paradójicamente, a más militarización y presencia de Estados Unidos en la zona, el crecimiento de todas las actividades relacionadas con este negocio va en aumento. Tanto en el lado colombiano, como en el lado ecuatoriano, el narcotráfico crece exponencialmente en sus distintas expresiones: en el pacífico nariñense está aumentando el área sembrada, el procesamiento crece de los dos lados, tanto en la provincia de Esmeraldas-Ecuador, como del lado colombiano, la frontera como tal se ha vuelto

con mayor fuerza en rutas o vías para la exportación, con la presencia y el posicionamiento de carteles mexicanos.

El dinero circulante en la zona es impresionante de quienes controlan el negocio, sobre todo lo relativo a la comercialización, logran subordinar y poner a su servicio, las fuerzas de la Marina y de los otros componentes de las fuerzas militares encargadas de la región. Lo mismo pasa con las autoridades civiles. De tal forma que allí lo predominante es la corrupción.

Por arte de magia aparece Guacho

El narcotráfico controla la región evidenciando así la fracasada política antidrogas de los Estados Unidos. En este contexto el “caso Guacho”, se ha convertido en lo más sonado de la región, por el tipo de acciones que esté ha realizado, el dimensionamiento que le han dado y la “ineficacia” de las fuerzas militares de los dos países encargadas de su aprehen-



sión, el hecho de que, siendo un grupo neta y exclusivamente dedicado al narcotráfico, lo sigan presentando como una agrupación guerrillera y continúen ligándolo con las FARC.

Este caso parece haber sido promovido y manejado por la cúpula de la inteligencia norteamericana para facilitar el nuevo reposicionamiento estadounidense en Ecuador, a través de la DEA, para llamar al asesoramiento norteamericano y propiciar la coopera-

ción entre las fuerzas militares de lado y lado en una política contrainsurgente, más que en el combate al narcotráfico, ha sido una cortina de humo para desarrollar otros propósitos y planes.

Las acciones de Guacho en territorio ecuatoriano y sobre el asesinato de los tres periodistas del Diario el Comercio, han ayudado al giro del gobierno ecuatoriano en su acercamiento a los Estados Unidos, con respecto a su política inter-

nacional, en la recomposición de fuerzas al interior del gobierno, en el reposicionamiento de la DEA y en la presencia en el cielo ecuatoriano del “avión itinerante”, como nueva versión de una base norteamericana en tierra.

Versión 2.0 de la Base Militar de EEUU en Manta

En abril se hizo pública la presencia de la DEA en Ecuador. En esta búsqueda eterna de acabar con el narcotráfico, Ecuador ha asistido de manera “casi voluntaria” a sumarse a una guerra que no es suya. Ecuador también acaba de romper relaciones con Venezuela, ubicándose en el grupo de países que actúan de manera abierta contra su gobierno y modificado su política frente al asilo de Assange. Todo ello a partir del Caso Guacho y sobre el cual los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de

Colombia han dado su lectura partiendo de las necesidades geopolíticas que requieren o les convienen.

Estos son los entramados que la política norteamericana impulsa contra las drogas, al que asistimos como meros títeres de un teatro barato, sacrificando nuestros propios intereses y deseos de ser actores activos de un proceso real de lucha contra el narcotráfico. Ha sido la historia quién continuamente nos ha demostrado que esta política ha fracasado con creces. Ha profundizado aún más el problema, ha traído grandes dificultades a la mayoría de la población empobrecida y ha servido a un puñado de oligarcas para impulsar sus propios planes individuales y mezquinos.

Pasa y seguirá pasando mucho mientras la indiferencia sea nuestra forma de vivir en esta Colombia nuestra.

“FRONTERA CAUTIVA: TRAS LOS RASTROS DE LOS PERIODISTAS EJECUTADOS” [*]

Guacho exigía, desde **enero de 2018**, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador.

El **25 de marzo**, los periodistas de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, llegaron a San Lorenzo y en Nuevo Mataje “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión”.

A las 17:00 del **26 de marzo**, el mayor Alejandro Zaldumbide de la Policía de San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de Guacho: “tengo tres personas retenidas, dos periodistas de Quito y el chofer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores. Ustedes provocaron”. Llevaba cerca de dos meses comunicándose con él. Guacho le envió tres fotografías de los secuestrados.

27 de marzo: se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados.

28 de marzo: Estaba en preparación un operativo de rescate. En la noche El Tiempo de Bogotá circuló el rumor de que los periodistas serían liberados. Ese día, un Fiscal esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo... pero los periodistas nunca llegaron.

Hubo una larga negociación entre el Gobierno ecuatoriano y Guacho, con mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp.

El **7 de abril**, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas. Hoy a las 3 les mando el vídeo de uno de ellos muerto”.

El **13 de abril**, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

Los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países.

21 de junio: equipos forenses y policías rescataron los cuerpos.

ESTE PRIMER PASO SEA EN UNA DIRECCIÓN COMÚN



“El sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una élite... .. Sí Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias... Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural... Por la justicia y no la venganza; por la reparación en la verdad y no el olvido”.

Papa Francisco en Colombia, septiembre 10 de 2017